

**INE/CG267/2024**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-4/2024**

### **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución impugnados.** En sesión extraordinaria celebrada el primero de diciembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado con número de Acuerdo **INE/CG628/2023** y la Resolución **INE/CG635/2023**, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil veintidós.

**II. Recurso de Apelación.** Inconforme con lo anterior, el doce de diciembre de dos mil veintitrés, el Representante Propietario del Partido Morena, interpuso ante el Consejo General de este Instituto, un Recurso de Apelación el cual se remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**III. Acuerdo de escisión y remisión a la Sala Regional.** El quince de enero de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala Superior emitió Acuerdo para escindir la demanda de dicho medio de impugnación, ordenando remitirla, a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México (en adelante Sala Regional Toluca) para que resolviera exclusivamente lo concerniente a los estados de México, Colima, Michoacán y Querétaro.

**IV. Recepción y turno.** Mediante acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca, acordó integrar el expediente identificado con la clave alfanumérica ST-RAP-4/2024 y turnarlo a su ponencia, para su sustanciación y resolución.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

**V. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el siete de febrero de dos mil veinticuatro, determinando en sus puntos resolutivos **PRIMERO** y **SEGUNDO** lo que se transcribe a continuación:

*“**PRIMERO. Se revocan** las conclusiones sancionatorias señaladas en el considerando quinto de esta sentencia para los efectos ahí establecidos.*

***SEGUNDO. Se confirman** las resoluciones controvertidas, en la parte que fue materia de pronunciamiento y competencia de esta Sala, con excepción de lo señalado en el punto resolutivo anterior”*

**VI. Cumplimiento.** Derivado de lo anterior, la sentencia emitida en el recurso de apelación **ST-RAP-4/2024** tuvo por efecto modificar el Dictamen Consolidado **INE/CG628/2023** y la Resolución **INE/CG635/2024**, con la finalidad de que esta autoridad emita una nueva resolución en la que funde y motive las sanciones que en derecho corresponda, respecto de las conclusiones sancionatorias 7.10-C28-CL, 7.23-C8-MORENA-QE y 7.23-C18-MORENA-QE, y se determine si atendiendo a las particularidades del caso, existe alguna infracción en materia de fiscalización electoral. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Sala Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

**C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil veintidós.

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el siete de febrero de dos mil veinticuatro, la Sala Regional Toluca resolvió revocar parcialmente la Resolución **INE/CG635/2023** y el Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG628/2023** motivo por el cual se procede a su modificación en los términos y efectos precisados en la sentencia respectiva, observando a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria.

**3. Alcance del cumplimiento** Que por lo anterior y con base a las Razones y Fundamentos expuestos en los considerandos **CUARTO** y **QUINTO** de la sentencia de mérito, relativas al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Regional Toluca determinó lo que se transcribe a continuación:

“(…)

**CUARTO. Estudio de fondo**

(…)

• **Falta de fundamentación y motivación. Timbrado extemporáneo de CFDI'S en el ejercicio de la revisión.**

(…)

*Ahora bien, respecto a las conclusiones **7.23-C8-MORENA-QE** y **7.23-C18-MORENA-QE**, cuya impugnación subsiste, el recurrente señala que, la resolución se encuentra indebidamente fundada y motivada respecto a la necesidad de aplicar una sanción por la señalada conducta **–timbrado extemporáneo de CFDIS en el ejercicio de la revisión–**, considerando que en los ejercicios pasados no se había sancionado.*

*Señala que, si bien antes se sancionaba la emisión de CFDI por concepto de nómina en un ejercicio fiscal distinto, **es la primera vez que se sanciona la supuesta emisión extemporánea pero dentro del ejercicio fiscalizado.***

*Sostiene que para justificar su decisión de sancionar tal conducta con el 1% del monto involucrado, la autoridad realizó manifestaciones dogmáticas para concluir en abstracto que sí debían sancionarse.*

*Precisa que la autoridad se limitó a sostener que la extemporaneidad en los timbrados de los comprobantes fiscales digitales la colocó en la necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de comprobación de operaciones*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*para tener certeza sobre el manejo de los recursos, **pero en ningún momento estableció qué procedimiento extraordinario de comprobación de operaciones tuvo que desahogar, ni demostró que la emisión extemporánea del CFDI dentro del mismo ejercicio fiscal implicara una obstaculización a sus labores de fiscalización.***

*El agravio es **fundado**. A juicio de esta Sala Regional la autoridad incurrió en falta de fundamentación y motivación al concluir que la conducta analizada - timbrado de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión-, debía sancionarse con el 1% del monto involucrado.*

*Como se aprecia del apartado correspondiente del dictamen y resolución impugnada, la autoridad analizó de manera conjunta las conclusiones sancionatorias respecto de la emisión de CFDI's timbrados de manera extemporánea, **distinguendo si la extemporaneidad se dio en el ejercicio sujeto a revisión o posterior a éste.***

*Al resolver, la autoridad estableció, en esencia, lo siguiente:*

*(...)*

*Con base en lo anterior, **la autoridad determinó que el sujeto obligado realizó el timbrado de los comprobantes fiscales de forma posterior a la fecha límite de la presentación de su declaración anual,** y con ello vulneró la previsión correspondiente a que los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios.<sup>1</sup>*

*Que, por esa razón, la comprobación no resultó idónea, **al colocársele en la necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de comprobación de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos del sujeto obligado.***

*De una interpretación sistemática de las normas citadas, la autoridad desprendió que los partidos tienen la obligación de emitir los comprobantes CFDI en tiempo, pues sólo a través del cumplimiento de la totalidad de los requisitos que señalan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora puede tener por acreditado que los*

---

<sup>1</sup> En este orden de ideas se desprende que, en las conclusiones de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

recursos del ejercicio fiscalizado efectivamente fueron aplicados y en su caso, enterados en el referido año.

Con base en tales consideraciones la autoridad valoró los elementos correspondientes a la calificación de la falta y determinó que se trataba de faltas GRAVES ORDINARIAS, procediendo a sancionar las conductas acreditadas en los términos siguientes:

Falta concreta: Emisión de comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea.	
<u>7.23-C8-MORENA-QE</u> El sujeto obligado emitió 1130 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes <b>timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión</b> , por un importe de \$5,757,140.01	<u>la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al <b>1% (uno por ciento)</b> sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria.</u>
(...)	(...)
<u>7.23-C18-MORENA-QE</u> El sujeto obligado emitió 194 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes <b>timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión</b> , por un importe de \$2,869,914.83.	<u>la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al <b>1% (uno por ciento)</b> sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria</u>
(...)	(...)

Como se aprecia de las conclusiones controvertidas, la autoridad identificó y sancionó **tres supuestos de extemporaneidad en el timbrado de los comprobantes fiscales**, con el 1% del monto involucrado, al que se presenta en el ejercicio de la revisión, el 5% al que se presenta en el ejercicio posterior al de la revisión, y con el 150%, a los presentados, correspondientes a un ejercicio distinto al sujeto a revisión. Se reitera que en este agravio solo son objeto de revisión las relativas al 1%, no obstante, se insertan en este análisis para explicar un aspecto de diferenciación de sanciones que no fue razonado por la autoridad responsable.

De manera general, la autoridad estableció que el sujeto obligado emitió extemporáneamente los CFDI por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea, es decir, **que fueron timbrados posteriormente a la fecha de presentación de la declaración anual. Conclusión respecto de la totalidad de conductas analizadas.**

## CONSEJO GENERAL CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024

En este primer aspecto, esta Sala Regional considera que la autoridad incurre en una incongruencia al establecer a fojas 1980 de su resolución que, ‘...el sujeto obligado realizó el timbrado de los comprobantes fiscales de forma posterior a la fecha límite de la presentación de su declaración anual’.

Se concluye lo anterior, en tanto que, tal afirmación no guarda razonabilidad con las consideraciones con las que pretende justificarse la sanción de la conducta, consistente en la **presentación extemporánea de los comprobantes en el mismo ejercicio de la revisión**, pues los partidos políticos, en términos de la normativa aplicable, están obligados a presentar la declaración atinente en el mes de marzo<sup>2</sup>.

En el caso, el ejercicio que se revisa corresponde al 2022, por lo que la declaración debió presentarse en marzo 2023, de ahí que, si el timbrado se realizó en el mismo ejercicio de la revisión (2022), como se establece en la conclusión, no puede sostenerse, únicamente con las premisas dadas por la autoridad responsable, que los timbrados fueron presentados con posterioridad a la fecha de la declaración, pues como se razonó previamente, dicho timbrado es el medio idóneo para la validación de operaciones con la autoridad hacendaria, así como un requisito para presentarla.

En efecto, en los anexos correspondientes en el dictamen de estas conclusiones solo se especifica cuánto tiempo de extemporaneidad tuvo el timbrado, pero no se evidencia que en todas las operaciones éste se dio después de la presentación de la correspondiente declaración, como se advierte de las siguientes reproducciones.



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS  
INFORME ANUAL 2022  
MORENA  
ESTADO DE QUERÉTARO  
SERVICIOS PERSONALES-EMISIÓN EXTEMPORÁNEA  
ANEXO 2-MORENA-GE

Cód.	Número cuenta	Moneda	Referencia	Descripción	Periodo de pago inicial	Periodo de pago final	Fecha de emisión (A)	Importe	Determinación según auditoría			
									Fecha en que debió haberse de conformidad con la ley 3, 3, 3, 3 (B)	Por extemporaneidad (C=D)	Referencia	
1	0-00000000	MEXICANOS	00000000	RENTAS DE	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	01/01/2022	01/01/2022	00	00
2	0-00000000	MEXICANOS	00000000	RENTAS DE	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	0.00	01/01/2022	01/01/2022	00	00

<sup>2</sup> Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2022: Artículos 9, 67, primer párrafo, 70, fracción IV, 72, fracción II, 74, séptimo párrafo, fracción II, 74-B, primer párrafo, 76, fracción V, 79 último párrafo, 86 fracción III, 88, noveno párrafo y 196 primer párrafo.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*Como se ve, la consideración de la responsable, relativa a que el timbrado de los comprobantes fiscales se dio de forma posterior a la fecha límite de la presentación de su declaración no se evidencia y, por sí misma, no supera la posible incongruencia con la conclusión analizada por la autoridad que sanciona el timbrado extemporáneo en el ejercicio fiscalizado, pues se da la posibilidad de supuestos incompatibles entre sí, lo cual actualiza la indebida fundamentación y motivación de la resolución.*

*Por otra parte, asiste la razón al recurrente cuando señala la falta de **fundamentación y motivación de la resolución, al sancionar la emisión extemporánea de CFDI, específicamente en el ejercicio de la revisión.***

*Del análisis de las conclusiones sancionatorias, queda patente que, si bien, la autoridad identificó los diferentes momentos en que se presentaron los comprobantes fiscales -en el ejercicio que se fiscaliza y en el ejercicio posterior-, **no explicó la diferencia entre éstos, y particularmente, no razonó porqué en el caso del primero corresponde una sanción del 1% del monto involucrado en relación a las acciones de verificación adicional que cada periodo podría implicar para esa autoridad.***

*Aun y cuando las conclusiones son coincidentes en cuanto a que sancionan el timbrado de manera extemporánea de los comprobantes, en la resolución no se establece la diferencia entre los dos supuestos sancionados, lo cual, implica motivación insuficiente de la decisión.*

*En tal virtud, resulta importante precisar que las razones que sustentan la sanción correspondiente al 5% del monto involucrado, por el **timbrado de manera extemporánea en el ejercicio posterior al de la revisión**, no fueron controvertidas.*

*Siendo el **timbrado extemporáneo en el ejercicio de la revisión**, el supuesto que se sancionó con el **1% del monto involucrado**, y que es controvertido en la especie.*

*En efecto, como se advierte de la resolución, al analizar las conductas sancionadas, el instituto no explicitó las razones que justificaran la diferenciación de los supuestos de incumplimiento en el timbrado de los comprobantes, y de manera general emitió consideraciones sobre las conclusiones respectivas, siendo que, en atención a la particularidad que representa el hecho de que los comprobantes **se timbraran extemporáneamente en el mismo ejercicio de la revisión**, requería se expresaran razones particulares, para estar en posibilidad de sancionar la conducta.*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*Así, la autoridad debió explicar la diferente gradación entre los timbrados que sí se realizan en el periodo del ejercicio, cómo esto afectó a la fiscalización, así como qué procedimientos extraordinarios implicaron para la autoridad; y con base en ello establecer la diferencia entre los dos supuestos, el timbrado en el mismo ejercicio, y timbrado en uno posterior a la declaración de impuestos, lo cual incluso motivó porcentajes diversos para individualizar la sanción. Y a partir de ello justificar, en lo particular, la acreditación de los timbrados extemporáneamente en el mismo ejercicio de la revisión y la consecuente sanción.*

*No obstante, en la resolución y dictamen no se plasmaron consideraciones específicas para distinguir los supuestos sancionados, lo cual, se traduce en una falta de fundamentación y motivación de las conclusiones controvertidas, **pues el instituto no justificó por qué se sancionaba con el 1%, ni explicó en qué forma, el timbrado de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión obstaculizó su función fiscalizadora.***

*En otras palabras, la autoridad fue omisa en señalar fundamentos y motivos para evidenciar **que el timbrado extemporáneo de los comprobantes en el ejercicio de la revisión** corresponde a una conducta punible. Máxime que la distinción entre los momentos en que se timbran, y se da validez a los comprobantes, tiene incidencia directa en la transparencia en la fiscalización.*

*En ese sentido, al advertirse que los fundamentos y motivos expresados por la responsable, en el caso de la conducta señalada, no atendieron a sus circunstancias específicas, sino que corresponden a razones genéricas para sancionar otro supuesto de timbrado extemporáneo, ello tiene incidencia directa en el posterior análisis de los elementos para sancionarla.*

*Para esta Sala Regional la autoridad no fijó los aspectos mínimos para estar en condiciones de sancionar una conducta que, en atención a lo concluido por la autoridad, generó una afectación a bienes jurídicos, tales como la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas.*

*En ese orden de ideas, en atención a que el análisis realizado por la autoridad en relación con la conclusión señalada no se encuentra debidamente fundado ni motivado, es que debe revocarse la resolución en lo que fue materia de impugnación.*

*En consecuencia, deberá procederse en los términos precisados en el apartado de efectos de esta sentencia.*

• **Motivación reforzada.**



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

- **Sanción no resulta proporcional a la afectación del bien jurídico tutelado.**

(...)

*Al haber resultado **fundado** el agravio hecho valer en contra de las conclusiones 7.23-C8-MORENA-QE y 7.23-C18-MORENA-QE y su correspondiente sanción, lo procedente es determinar los efectos de dicha determinación, lo cual se hará en la parte final de este Considerando.*

(...)

- **Conclusión 7.10-C28-MORENA-CL**

*Con relación a esta conclusión sancionatoria, el recurrente expone:*

(...)

*Esta Sala Regional considera **fundados** los agravios relativos a la indebida motivación de la conclusión sancionatoria en estudio.*

(...)

*En primer término, es importante referir que el motivo por el cual la responsable determinó sancionar al apelante no se ajusta a parámetros de legalidad, en razón de que ni de la resolución, ni del dictamen, ni de sus anexos se puede obtener si, tal como lo observó la responsable, alguno de los dos proveedores con quienes se celebraron las operaciones observadas efectivamente había o no causado baja del Registro Nacional de Proveedores al momento en el cual se realizó la transacción.*

*En efecto, de los Lineamientos que rigen el registro de los contratos que se celebran entre sujetos los obligados y proveedores<sup>3</sup>, así como el Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que al tal Registro se puede ingresar, reingresar, inscribirse, reinscribirse, tener cancelación voluntaria o por autoridad, reactivación y refrendo por diversas causas.*

---

<sup>3</sup> INE/CG27/2020. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN, EMISIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, REGISTRO DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PROVEEDORES Y SUJETOS OBLIGADOS, REFRENDO, CANCELACIÓN VOLUNTARIA, REINSCRIPCIÓN, CANCELACIÓN POR AUTORIDAD Y REACTIVACIÓN, EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 207, 356, 357, 359, 359 BIS, 360, 361, 361 BIS Y 361 TER, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*Lo anterior tiene especial relevancia, pues con base en ello, para que se pueda aseverar que el apelante contrató con proveedores que no estaban registrados en el Registro Nacional de Proveedores, la responsable debe sustentarlo, lo que en el caso no acontece.*

*Ello atiende a que en términos de los lineamientos señalados, el estatus de activo de un proveedor en el Registro Nacional de Proveedores puede modificarse y atender a diversas causas, tales como: falta del refrendo del registro,<sup>4</sup> cancelación voluntaria, reinscripción, cancelación por autoridad y reactivación en el Registro a los Proveedores, por lo que, si la responsable fue omisa en establecer si al realizar esas operaciones el estatus del proveedor era activo o inactivo, es válido afirmar que no tenía bases para establecer que ese proveedor no podría considerarse inscrito en el Registro Nacional.*

*En efecto, la responsable al emitir el oficio de errores y omisiones si bien estableció que la calidad de activo en el Registro Nacional de Proveedores atiende a si, en su caso, los proveedores realizaron o no las gestiones atinentes al refrendo y que en caso de no hacerlo su estatus cambia a cancelado, lo cierto es que fue omisa en analizar si los proveedores mencionados no habían reingresado al registro y a partir de cuando, para con esa base, poder determinar si las operaciones se dieron en un periodo en el cual estaban o no dados de alta en el respectivo registro.*

*De ahí se sigue que, la autoridad soslayó que puede haber periodos en los que el estatus de un proveedor sea inactivo y otros en los que no, existiendo incluso la posibilidad de que quienes se hayan reinscrito o reactivado durante los meses de enero y febrero del año correspondiente no estén obligados a presentar su referendo<sup>5</sup> y que el hecho de que estos se encuentran bajo un estado de no actualizados puede atender a diversas causas, por lo que parte de la motivación de la conclusión sancionatoria que debió establecer la responsable es analizar la fecha en la que se celebraron las operaciones en relación con las datas en las que el proveedor estuvo como inactivo para que de esa forma se logre establecer que el apelante incurrió en la contratación de un proveedor no registrado.*

*Ello pues de la mera consulta al SIF se puede apreciar que un proveedor puede cambiar de estatus en el Registro Nacional de Proveedores en diversos momentos.*

---

<sup>4</sup> Artículo 359 Bis del RIF

<sup>5</sup> Artículo 25 del Acuerdo INE/CG27/2020.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*En efecto, en los anexos en los que la autoridad basa la motivación de su conclusión sancionadora, solo se establece cuándo se canceló el registro de algún proveedor y la fecha de la operación, pero de ninguna forma se analiza si el mismo reingresó y a partir de cuándo.*

*Esta falta de fundamentación se hace patente, pues se observan en tales anexos múltiples operaciones con los mismos proveedores observados durante el mismo ejercicio, por lo que no se explica de forma suficiente por qué algunas de las operaciones son las observadas y otras no, lo que de suyo genera insuficiente motivación de la sanción y que asista razón al recurrente respecto a que no se acredita de forma fehaciente que los proveedores no estuvieran inscritos en el registro atinente al momento de las operaciones observadas.*

[illegible]

*Lo anterior se corrobora pues al momento de establecer las razones por las que consideró no atendidas las observaciones formuladas fueron las siguientes:*

$$\left( \begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

*Tal como se observa, de lo razonado por la responsable no es posible obtener en qué periodos estuvieron inactivos los proveedores con quienes fueron observadas las operaciones y tampoco si las operaciones observadas fueron realizadas una vez que estos proveedores tuvieran el estatus de inactivo o activo.*

*Tal información está en la base de datos del mencionado registro pues de su consulta aleatoria en la página de internet se constata que el INE tiene identificación de los momentos en los que se hace cada movimiento, desagregado hasta la hora y el minuto donde se dio el cambio, como se advierte de la siguiente reproducción:<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> Consultable en <https://rnp.ine.mx/rnp/app/usuario?execution=e2s1>

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Registro Nacional de Proveedores V.5.0  
(08/01/2024 08:28:37) (3.6.3.201 - PROJA)

Consulta Ciudadana

Proveedores Nacionales | Productos y servicios nacionales | Proveedores Extranjeros | Productos y servicios extranjeros

Listado público de Proveedores Nacionales

RFC: ID RNP: Nombre / Razón social: Entidad: Seleccione

Fecha de registro, desde: hasta: Fecha del estatus, desde: hasta:

Buscar Limpiar

Total de Proveedores Nacionales: 1

ID RNP	Nombre / Razón social	Fecha de registro	Entidad	Tipo de persona	Estatus	Fecha del estatus	Productos y servicios
20150118209000	RAFAEL JAIME REVELEZ COBARRUBIA	18/01/2015	CIUDAD DE MEXICO	Fisica	Cancelación por no Refrendo	01/03/2018 00:40:27	
20150118209000	RAFAEL JAIME REVELEZ COBARRUBIA	18/01/2015	CIUDAD DE MEXICO	Fisica	Activo (Reinscripción)	14/02/2017 00:22:11	
20150118209000	RAFAEL JAIME REVELEZ COBARRUBIA	18/01/2015	CIUDAD DE MEXICO	Fisica	Cancelación por no Refrendo	01/03/2016 00:03:00	

*De tal manera está en la posibilidad de analizar el estatus del proveedor respecto del momento de cada operación, por lo que, al no hacerlo de esa manera, la motivación vertida en la conclusión sancionadora en análisis es insuficiente como ya se señaló.*

*No pasan inadvertidas el resto de las alegaciones que hace valer el apelante, sin embargo, ante la revocación de la conclusión sancionatoria por la insuficiencia de motivación de la determinación en relación a si la observación atendió al estatus del proveedor, sin observar las posibilidades de reingreso, reactivación, refrendo y reinscripción, ocasiona que ante la falta de identificación del motivo de la conducta, no tenga ningún fin práctico analizarlos.*

*De manera que, ante la indebida motivación, lo procedente es **revocar la conclusión sancionatoria 7.10-C28-MORENA-CL para el efecto** de que la responsable justifique y sustente las razones por las que consideró que el apelante celebró operaciones con proveedores no registrados en el Registro Nacional de Proveedores, estableciendo si el estatus de activo lo tenían o no al momento de celebrar tales transacciones y contemplando que la operatividad que rige tal registro derivado de las reactivaciones de los registros que pueden darse a la luz del procedimiento previsto en el artículo 38 del Acuerdo INE/CG27/2020. Lo anterior, conforme a las directrices del apartado de efectos al final de este Considerando.*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

(...)

*En virtud de lo anterior, procede revocar parcialmente la resolución controvertida y el dictamen correspondiente, en lo referente a las conclusiones sancionatorias 7.23-C8-MORENA-QE, 7.23-C18-MORENA- QE y 7.10-C28-MORENA-CL y su correspondiente sanción, lo procedente es determinar los efectos de dicha determinación.*

**QUINTA. Efectos**

*Con base en lo que ha sido resuelto en este fallo, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral:*

*I. Con relación a las conclusiones sancionatorias 7.23-C8-MORENA-QE y 7.23-C18-MORENA-QE, deberá modificar la resolución INE-CG-635-2023, únicamente, para el efecto de que funde y motive la sanción que en derecho corresponda, tomando en consideración lo aquí expuesto.*

*II. Asimismo, con relación a la conclusión 7.10-C28-CL deberá establecer los elementos que permitan advertir con certeza los motivos por los que consideró que las operaciones observadas se llevaron a cabo con proveedores cuyo estado fuera inactivo al momento de haber realizado la operación con el apelante y sustentar las razones por las que consideró que el proveedor se encontraba fuera del Registro Nacional, para lo cual, deberá modificar el dictamen y sus anexos en lo atinente.*

*III. La nueva resolución, y en su caso, el dictamen, deberán emitirse tomando en consideración lo expuesto en la parte considerativa de esta ejecutoria.*

*IV. Ello deberá cumplimentarse dentro del plazo de 20 días hábiles contado a partir del día siguiente al que se notifique este fallo, lo cual deberá informar a esta Sala, dentro de las 24 horas siguientes, debiendo adjuntar las constancias que acrediten el cumplimiento dado a lo aquí ordenado.*

(...)”

En consecuencia, se advierte que la Sala Regional Toluca dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG628/2023**, y la Resolución identificada como **INE/CG635/2023**, por lo que este Consejo General únicamente se abocara al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en las conclusiones **7.23-C8-MORENA-QE, 7.23-C18-MORENA-QE y 7.10-C28-**

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

**MORENA-CL** del Dictamen Consolidado; considerando **18.2.22**, inciso **c)**, conclusiones **7.23-C8-MORENA-QE**, **7.23-C18-MORENA-QE**, y considerando **18.2.9**, inciso **k)**, conclusión **7.10-C8-MORENA-CL** en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Toluca, materia del presente Acuerdo.

**4. Cumplimiento.** Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones que emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, lo ordenado en el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **ST-RAP-4/2024**.

**5. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Toluca.**

Sentencia	Estado	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución controvertida.	Querétaro	<b>7.23-C8-MORENA-QE</b>  y <b>7.23-C18-MORENA-QE</b>	<b>Revocar</b> parcialmente, la Resolución impugnada respecto de las conclusiones <b>7.23-C8-MORENA-QE</b> y <b>7.23-C18-MORENA-QE</b> para que esta autoridad emita una nueva determinación en la que funde y motive la sanción que en derecho corresponda conforme a los parámetros analizados por la Sala Regional Toluca.	Se adiciona el considerando <b>16.2</b> en relación con el Considerando <b>18.2.22</b> , inciso <b>c)</b> , conclusiones <b>7.23-C8-MORENA-QE</b> y <b>7.23-C18-MORENA-QE</b> , correspondientes al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro</b> de la Resolución <b>INE/CG635/2023</b> .
Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el Dictamen Consolidado y la Resolución controvertida	Colima	<b>7.10-C28-MORENA-CL</b>	<b>Revocar</b> parcialmente el Dictamen y la Resolución impugnada respecto de la conclusión <b>7.10-C28-MORENA-CL</b> para que esta autoridad establezca los elementos que permitan advertir con certeza los motivos por los que consideró que las operaciones observadas se llevaron a cabo con proveedores cuyo estado fuera inactivo al momento de haber realizado la operación con el apelante y sustentar las razones por las que consideró que el proveedor se encontraba fuera del Registro Nacional, para lo cual, deberá modificar el dictamen y sus anexos en lo atinente.	Se modifica la parte conducente en el apartado <b>7.10</b> relativo al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Colima</b> y el anexo <b>19-Morena-CL</b> del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo <b>INE/CG628/2023</b> ; así como el Considerando <b>18.2.9</b> , inciso <b>k)</b> , conclusión <b>7.10-C28-MORENA-CL</b> y resolutive <b>DÉCIMO</b> , inciso <b>k)</b> , correspondientes al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Colima</b> de la Resolución <b>INE/CG635/2023</b> .

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

**6. Capacidad Económica.** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Ahora bien, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2024, como se muestra a continuación:

Partido	Entidad	Número de Acuerdo	Financiamiento para actividades ordinarias permanentes
Morena	Colima	IEE/CG/A065/2023	\$8,440,745.47 <sup>7</sup>
	Querétaro	IEEQ/CG/A/003/24	\$31,145,711.22

De lo anterior se desprende que el Partido Político Nacional con acreditación local sujeto al procedimiento de fiscalización, cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que fueran impuestas, en virtud de que le fueron asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales Electorales de Colima y Querétaro.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática, dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:

---

<sup>7</sup> Financiamiento público ordinario de octubre 2023 a septiembre 2024.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Entidad	Resolución de la autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas a febrero de 2024	Monto por saldar
Colima	INE/CG1343/2021	\$4,817,646.12	\$3,992,069.82	\$825,576.30
	INE/CG113/2022	\$3,319,994.12	\$0.00	\$3,319,994.12
	INE/CG736/2022	\$2,419,638.16	\$0.00	\$2,419,638.16
	INE/CG332/2023	\$75,594.57	\$0.00	\$75,594.57
Querétaro	INE/CG736/2022	\$9,028,136.94	\$6,220,242.72	\$2,807,894.22

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político infractor, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral en la presente Resolución.

**7. Modificaciones realizadas al Dictamen Consolidado INE/CG628/2023, relativas al Comité Ejecutivo Estatal de Colima del Partido Morena.**

Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado **INE/CG628/2023** y la Resolución **INE/CG635/2023** respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado relativas a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Morena, correspondientes al ejercicio dos mil veintidós, por lo que hace a la conclusión **7.10-C28-MORENA-CL** del Considerando **18.2.9** relativo al Comité Ejecutivo Estatal de Colima, en los términos siguientes:

**Modificaciones al Dictamen Consolidado INE/CG628/2023.**

“(…)

**7.10 Morena/CL**



**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/14259/ 2023 Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. CEE/FIN- 100/2023 Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
3 4	<b>RNP</b>  Se observaron facturas las cuales rebasan las 1,500 UMA (en el año 2022 equivalía a \$96.22 x 1,500 = \$144,330.00), identificadas con (1) en la columna "Referencia" del Anexo 7.1.2.2 del presente oficio; además se observaron facturas por concepto de propaganda y publicidad, identificadas con (2) en la columna "Referencia" del Anexo 7.1.2.2 del presente oficio, sin embargo, de la verificación al Registro Nacional de Proveedores, estos se encuentran bajo un estado de no actualizados, cabe señalar que el RF establece que todos los proveedores que realicen operaciones con los sujetos obligados por	"De la revisión al Anexo 7.1.2.2, es menester señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 82, numeral 2 del reglamento de fiscalización se menciona lo siguiente: "Reglamento de Fiscalización Artículo 82. Lista de proveedores 2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes es sólo podrán celebrar operaciones con	<b>No atendida</b>  Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado en el SIF, se observó que aun y cuando manifestó que en la normativa aplicable no establece la obligación de que un partido político deba cerciorarse que los proveedores se encuentran con estatus activo al momento de la celebración de contratos con proveedores inscritos en el RNP, manifiesta además que la única obligación del sujeto obligado consiste en contratar proveedores que estén registrados ante el RNP sin verificar el estatus de éste, los anteriores argumentos devienen de inoperantes, toda vez que la normativa es clara al señalar que, si bien es una obligación de los proveedores es refrendar su registro cada año para mantener su estatus de vigente en las listas de proveedores inscritos en el RNP, y contrario a su dicho también es obligación de los partidos políticos verificar el estatus de activo y vigente, pues el artículo 82 numeral 2 del RF establece que los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, a contrario sensu, de no hacerlo, no podrán celebrar operaciones con los sujetos obligados ya que no refrendar es una causal de cancelación, y baja del registro nacional de proveedores, máxime a lo anterior en el acuerdo INE/CG27/2020 por el que se aprueban los lineamientos para la	<b>7.10-C28-MOREN A-CL</b>  El sujeto obligado omitió contratar con proveedor inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de \$1,575.00.	Omitir contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores	Artículo 82, numeral 2 del RF.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. <b>INE/UTF/DA/14259/2023</b> Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. <b>CEE/FIN-100/2023</b> Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p><i>concepto de propaganda, eventos y espectáculos o cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios deberán de estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.</i></p> <p><i>Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA/12219/2023 notificado el 18 de agosto de 2023, se le hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.</i></p> <p><i>Con escrito de respuesta número CEN/FIN-081/2023 con fecha 1 de septiembre de 2023, el sujeto obligado</i></p>	<p><i>proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento. "(...)"</i></p> <p><i>Véase Anexo R2-1-MORENA-CL, página 129 del presente dictamen</i></p>	<p>inscripción, emisión de hojas membretadas, registro de contratos celebrados entre proveedores y sujetos obligados, refrendo, cancelación voluntaria, reinscripción, cancelación por autoridad y reactivación, en el registro nacional de proveedores, señala en su artículo 19 que se debe realizar el refrendo para continuar con la calidad de "Activo" y poder celebrar operaciones con los partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes. En el artículo 24 del acuerdo antes mencionado se señala que en caso de que algún proveedor inscrito en el RNP no realice su refrendo, será cancelado en el RNP, cambiando su estatus a cancelado por no refrendo y que se enviará correo electrónico al proveedor, mediante el cual se informará la cancelación en el Registro Nacional de Proveedores por no refrendo; así como, notificación electrónica a los responsables de finanzas de los Partidos Políticos Nacionales y locales, con la relación de proveedores cancelados, por las consideraciones aquí vertidas se puede concluir que el sujeto obligado se enteró de cuales proveedores se encontraban vigentes y cuales habían causado baja por no refrendo, por esta circunstancia el sujeto obligado no puede desconocer sus obligaciones, máxime a todas las disposiciones legales antes mencionadas, el artículo 278 numeral 3 del RF le impone un imperativo que indica, los partidos no podrán recibir bienes o servicios cuando los proveedores o prestadores de servicios no se encuentren inscritos o</p>			

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/14259/ 2023 Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. CEE/FIN- 100/2023 Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo o que incumplió																				
	<p><i>manifestó lo que a la letra se transcribe:</i></p> <p><i>"De la revisión al Anexo 7.1.2.2, es menester señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 82, numeral 2 del reglamento de fiscalización menciona lo siguiente:</i></p> <p><i>"Reglamento de Fiscalización</i></p> <p><i>Artículo 82.</i></p> <p><i>Lista de proveedores</i></p> <p><i>2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento."</i></p>		<p>se encuentren con situación de baja en el Registro Nacional de Proveedores de conformidad con el artículo 356 del Reglamento.</p> <p>En acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Expediente ST-RAP-4/2024, en la que se determinó revocar esta conclusión sancionatoria, ante la indebida motivación, para el efecto de que se justifiquen y sustenten las razones por las que se consideró que el apelante celebró operaciones con proveedores no registrados en el RNP, se analizó la fecha de operación de cada registro observado y se identificó en el RNP el estatus de cada proveedor como se muestra en el cuadro siguiente:</p> <table><tr><th>Nombre proveedor</th><th>Fecha de operación</th><th>Fecha de cancelación</th><th>Estatus del proveedor al momento de la operación</th><th>Monto</th></tr><tr><td>Martha Macías Ramírez</td><td>07/07/2022</td><td>01/03/2022</td><td>Cancelación por no Refrendo</td><td>\$1,575.00</td></tr><tr><td>José Carlos Villareal Cárdenas</td><td>10/02/2022</td><td>01/03/2022</td><td>Activo</td><td>\$8,356.64</td></tr><tr><td>José Carlos Villareal Cárdenas</td><td>15/02/2022</td><td>01/03/2022</td><td>Activo</td><td>\$34,800.00</td></tr></table>	Nombre proveedor	Fecha de operación	Fecha de cancelación	Estatus del proveedor al momento de la operación	Monto	Martha Macías Ramírez	07/07/2022	01/03/2022	Cancelación por no Refrendo	\$1,575.00	José Carlos Villareal Cárdenas	10/02/2022	01/03/2022	Activo	\$8,356.64	José Carlos Villareal Cárdenas	15/02/2022	01/03/2022	Activo	\$34,800.00			
Nombre proveedor	Fecha de operación	Fecha de cancelación	Estatus del proveedor al momento de la operación	Monto																						
Martha Macías Ramírez	07/07/2022	01/03/2022	Cancelación por no Refrendo	\$1,575.00																						
José Carlos Villareal Cárdenas	10/02/2022	01/03/2022	Activo	\$8,356.64																						
José Carlos Villareal Cárdenas	15/02/2022	01/03/2022	Activo	\$34,800.00																						

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/14259/ 2023 Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. CEE/FIN- 100/2023 Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis		Conclusión	Falta concreta	Artículo que incump lió		
	<p>En ese entendido, se debe precisar que la única responsabilidad del sujeto obligado estriba en razón a la contratación u operación exclusivamente con proveedores registrados en el RNP, tal como lo establece el artículo citado.</p> <p>Conforme a lo anterior, si bien es cierto que la autoridad fiscalizadora previene a mi representado en razón de haber realizado operaciones con proveedores no registrados en el RNP, la Unidad Técnica de Fiscalización, determinó está observación derivada de una interpretación genérica del contenido en el artículo 82 numeral 2 y 356 numerales 1 y 2, del Reglamento de Fiscalización, esa autoridad fue omisa en tipificar</p>		<table><tr><td>Total:</td><td>\$44,731.64</td></tr></table>	Total:	\$44,731.64	<p>Del análisis al cuadro anterior se determinó lo siguiente:</p> <p>Se constató que los registros señalados con (1) en la columna "REFERENCIA DICTAMEN" del <b>Anexo 19-Morena-CL</b> del presente dictamen, los proveedores correspondientes se encontraban activos durante la contratación y celebración de operaciones, por lo que la observación <b>quedó atendida</b> en este punto.</p> <p>Respecto a los registros señalados con (2) en la columna "REFERENCIA DICTAMEN" del <b>Anexo 19-Morena-CL</b> del presente dictamen, los proveedores no se encontraban activos durante la contratación y celebración de operaciones, por tal razón la observación <b>no quedó atendida</b> en este punto.</p> <p>Cabe señalar que, por lo que respecta al proveedor José Carlos Villareal Cárdenas, se dio su cancelación por no refrendo en el Registro Nacional de Proveedores el 01 de marzo de 2022 y se encontró nuevamente activo (reinscripción) el 24 de marzo de 2022, es por ello por lo que las operaciones identificadas con los consecutivos 10 y 18 de los días 10 y 15 de febrero de 2022, respectivamente, las realizó antes de su cancelación en el Registro Nacional de Proveedores.</p> <p>Por lo que, tanto dichas operaciones,</p>			
Total:	\$44,731.64								

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. <b>INE/UTF/DA/14259/ 2023</b> Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. <b>CEE/FIN- 100/2023</b> Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p><i>en armonía con lo siguiente: (...)</i></p> <p><i>Véase respuesta completa en escrito de respuesta CEN/FIN-081/2023, de la página 139 a la 142.</i></p> <p><i>(...)"</i></p> <p><i>Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:</i></p> <p><i>Se constató que los registros señalados con (1) en la columna "REFERENCIA 1RA CORRECCION" del Anexo 7.1.2.2 del presente oficio, los proveedores correspondientes se encontraban activos durante la contratación y celebración de operaciones.</i></p> <p><i>Respecto a los registros señalados con (2) en la columna "REFERENCIA 1RA CORRECCION"</i></p>		<p>así como las que realizó una vez que ya se encontraba activo por reinscripción en el Registro Nacional de Proveedores, identificadas con los consecutivos 3, 7, 8, y 13 (del 30 de septiembre, 27 de julio, 29 de junio, y 08 de abril todas de 2022, respectivamente) del mismo proveedor, se encuentran relacionadas con (1) en la columna "REFERENCIA DICTAMEN" del <b>Anexo 19-Morena-CL.</b></p> <p>Por otra parte, por lo que respecta a la proveedora Martha Macías Ramírez, se dio su cancelación por no refrendo en el Registro Nacional de Proveedores el 01 de marzo de 2022, y se encontró nuevamente activa (reinscripción) el 15 de julio de 2022. En consecuencia, las operaciones que realizó en ese lapso del 01 de marzo de 2022 al 14 de julio de 2022 se realizaron cuando su estatus era de cancelación en el Registro Nacional de Proveedores.</p> <p>Es por ello, que las operaciones con los consecutivos 12, 15 y 17 (del 20 de julio, 28 de octubre y 26 de julio todas de 2022, respectivamente) las realizó cuando ya se encontraba activa en el Registro Nacional de Proveedores, por lo que encuentran relacionadas con (1) en la columna "REFERENCIA DICTAMEN" del <b>Anexo 19-Morena-CL.</b></p> <p>Y solo la operación del 07 de julio de 2022 identificada con el consecutivo 9, la realizó cuando su estatus era de cancelación en el Registro Nacional de Proveedores, por lo que cuenta con la referencia (2) en la columna "REFERENCIA DICTAMEN" del</p>			

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

ID	Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/14259/ 2023 Fecha de notificación: 22 de septiembre de 2023	Respuesta Escrito Núm. CEE/FIN- 100/2023 Fecha del escrito: 29 de septiembre de 2023	Análisis	Conclusión	Falta concreta	Artículo que incumplió
	<p><i>del Anexo 7.1.2.2 del presente oficio, los proveedores no se encontraban activos durante la contratación y celebración de operaciones.</i></p> <p><i>Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Las aclaraciones que a su derecho convenga.</i></li> </ul> <p><i>Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, numeral 2 y 356, numerales 1, 2 y 5, del RF.</i></p>		Anexo 19-Morena-CL.			

## **8. Modificaciones a la Resolución INE/CG635/2023, derivado de lo mandado por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-RAP-4/2024**

“(…)

### **16.2. Emisión de comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea.**

De conformidad con el artículo 29, fracción IV del Código Fiscal de la Federación<sup>8</sup> y el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta<sup>9</sup>, los contribuyentes están obligados a expedir comprobantes fiscales por las retenciones de contribuciones que efectúen y remitirlos al Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, el artículo 68 de la Ley General de Partidos Políticos<sup>10</sup> y el artículo 46, numeral 1 del del Reglamento de Fiscalización<sup>11</sup>, establecen que los partidos políticos tienen la obligación de retener y enterar a las autoridades fiscales el Impuesto Sobre la Renta que corresponda a sueldos, salarios, honorarios y

---

<sup>8</sup> **“Artículo 29.-** Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: (...) **IV.** Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a: **a)** Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código y de los contenidos en los complementos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter general. **b)** Asignar el folio del comprobante fiscal digital. **c)** Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

<sup>9</sup> **“Artículo 99.-** Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: (...) **III.** Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.”

<sup>10</sup> **Artículo 68. 1.** El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. **2.** Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.

<sup>11</sup> **Artículo 46.** Requisitos de los comprobantes de las operaciones **1.** Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo anterior deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Por otra parte, la regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, señala lo siguiente:

*“Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:*

Número de trabajadores o asimilados a salarios	Día hábil
De 1 a 50	3
De 51 a 100	5
De 101 a 300	7
De 301 a 500	9
Más de 500	11

*En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones.*

*Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta regla posterior al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará como fecha de expedición y entrega de tal comprobante fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el pago correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el CFDI.*

*Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que se refiere el párrafo anterior, deberán incorporar al mismo el complemento de nómina, por cada uno de los pagos realizados durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI mensual deberá incorporar tantos complementos como número de pagos se hayan realizado durante el mes de que se trate.*



**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

*En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución de resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán generar y remitir el CFDI para su certificación al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación, en estos casos cada CFDI se deberá entregar o poner a disposición de cada receptor conforme a los plazos señalados en el primer párrafo de esta regla, considerando el cómputo de días hábiles en relación a la fecha en que se certificó el CFDI por el SAT o proveedor de certificación de CFDI.*

*En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán asentar, en los campos correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados al mismo, por cada concepto, conforme a lo dispuesto en la Guía de Llenado del Anexo 20 que al efecto publique el SAT en su portal. No obstante, lo señalado, los contribuyentes deberán efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el CFDI mensual conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación.*

De lo anterior, se advierte que la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 establece los plazos en que los contribuyentes podrán expedir los CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, en cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones.

Ahora bien, la normatividad es clara al señalar que los gastos se deben registrar cuando se pacten, se reciban los bienes o se paguen, independientemente de la fecha de realización considerada para fines contables, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 20 de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).

Por lo tanto, los partidos políticos tienen la obligación de realizar el timbrado de los pagos de nómina en un plazo que va de los tres a los once días como máximo, según el número de trabajadores, en ese sentido, los CFDI que fueron emitidos después de los once días hábiles de la fecha de pago, son sujeto de sanción, en virtud de haber incumplido las exigencias fiscales.

Asimismo, en el caso de emisión y timbrado de comprobantes de CFDI por concepto de nóminas correspondientes a la segunda quincena de diciembre o que correspondan a pagos relacionados a nóminas y que se hubiesen pagado en los

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

últimos días del mes de diciembre del 2022, se considerará un plazo de 11 días hábiles a partir de la fecha del pago realizado, a efecto de que sean valorados como emitidos dentro del plazo que señala como límite la miscelánea fiscal de dicho ejercicio, los que excedan dicho periodo de tiempo serán considerados como CFDI emitidos que corresponden a otro ejercicio diferente al ejercicio de revisión.

En consecuencia, al timbrar los CFDI de nómina, se garantiza que el recibo de pago cumple con todos los requisitos fiscales, como la identificación del empleador y del trabajador, la descripción de los conceptos de pago, el cálculo de impuestos y deducciones, entre otros aspectos. Además, el timbrado oportuno permite a las autoridades fiscales verificar la autenticidad y la integridad del CFDI.

Por lo tanto, es importante que los partidos políticos aseguren que sus nóminas estén correctamente timbradas y que cumplan con todas las disposiciones fiscales y legales aplicables. Esto no solo evita sanciones y multas, sino que también brinda mayor legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas, pues permite que la autoridad fiscalizadora electoral pueda conocer de manera cierta los egresos realizados mes con mes y evita un retraso en la adecuada verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

Es preciso señalar que la autoridad fiscalizadora realiza un complejo proceso de auditoría que comprende diversas etapas de revisión, comprobación e investigación, con la finalidad de conocer la veracidad de los ingresos y egresos reportados por los sujetos obligados, sin embargo, para que este proceso se desarrolle en óptimas condiciones, es necesario que los sujetos obligados se apeguen a los requisitos fiscales previstos en la legislación mexicana.

En consecuencia, al omitir realizar los timbrados dentro de los plazos señalados, redundaría directamente en el ejercicio de las atribuciones revisoras conferidas a esta autoridad electoral para garantizar la rendición de cuentas y transparentar el manejo de los recursos públicos, lo anterior, ya que debido al diseño del sistema de fiscalización, el cual busca una revisión en tiempo real de las operaciones realizadas<sup>12</sup> por los sujetos obligados, por lo que el timbrado extemporáneo no debe considerarse como una irregularidad menor, sino como una falta sustantiva que afecta la función fiscalizadora de la autoridad electoral y, por ende, a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

---

<sup>12</sup> Dicha afirmación ha sido sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder al resolver el SUP-RAP-243/2022.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Asimismo, se debe tener en cuenta que mientras más tiempo tarde el sujeto obligado en hacer el registro, menos tiempo y oportunidad tienen la autoridad fiscalizadora para realizar sus funciones de vigilancia de los recursos, por lo que trae consigo que la autoridad tenga que realizar procedimientos extraordinarios, tal como se ejemplifica a continuación: Si el partido realiza los pagos de nómina en el mes enero y los timbra hasta octubre, la autoridad tiene que implementar procesos adicionales como: solicitar estados de cuenta a Comisión Nacional Bancaria y de Valores para verificar que mes con mes si se vio reflejada la dispersión de nómina a los trabajadores, se tiene que solicitar información al Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) a efecto de verificar si fiscalmente timbró los comprobantes en tiempo, y una vez que se obtenga dicha información la autoridad tiene que cotejar todos los estados de cuenta y pagos con los trabajadores a los que se le pagó nómina y posteriormente verificar si dicha cantidad cuadra con lo reportado en el SAT, por lo que, al no cumplir con la mencionada obligación, el sujeto obligado estaría retrasando el actuar de la autoridad fiscalizadora.

Debido a lo anterior y ante las exigencias fiscales establecidas en la regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, este Consejo determinó modificar su criterio adoptado en ejercicios anteriores, con la finalidad de no solo sancionar aquellos timbrados realizados de manera posterior al ejercicio (sancionado con el 5% del monto involucrado), sino también de incluir el timbrado extemporáneo dentro del ejercicio de revisión de aquellos pagos de nómina en exceden el plazo que va de los tres a los once días como máximo posterior al mes laborado (sancionado con el 1% del monto involucrado).

Lo anterior, encuentra sustento en la *ratio decidendi* de la jurisprudencia 9/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “**INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA**”, en la que se indica **que el registro fuera de tiempo de la información que deberá someterse a fiscalización, actualiza un daño directo a la rendición de cuentas y a la transparencia, que permiten conocer oportunamente, el uso dado a los recursos partidistas** para fines proselitistas.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que se debe aplicar un método de graduación de carácter progresivo y diferenciado por esta conducta, lo cual sustenta la potestad sancionadora del Consejo General, en el sentido de calificar cada caso en lo individual, esto es así, derivado de que convergen dos tipos de extemporaneidades que deben calificarse de manera distinta, con ese

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

sustento es necesario fijar un parámetro objetivo y gradual atendiendo al impacto que tuvo en las labores de fiscalización cada temporalidad, ya que si bien existió un retraso en la expedición de las nóminas la autoridad fiscalizadora sí pudo conocer del destino de los recursos pagados por este concepto, aunque la periodicidad no haya sido igual en todas las operaciones.

En este orden de ideas el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las penas, indica que para imponer una pena debe haber proporcionalidad entre el delito que se sancione y el bien jurídico afectado. Si bien ese artículo habla de delitos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación he establecido que la prohibición de imponer multas excesivas no puede restringirse al ámbito penal, sino que debe hacerse una interpretación extensiva para deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos, como es el caso.

En relación con su concepto, el mismo órgano jurisdiccional ha establecido que se está ante una multa excesiva:

- a) Cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito;
- b) Cuando se propasa, es decir, que va más adelante de lo lícito y lo razonable; y
- c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.

En ese sentido, en el referido artículo 22, párrafo primero, el legislador mandato una garantía para los ciudadanos de que la imposición de una pena o sanción deberá ser proporcional al ilícito cometido, es menester precisar que este diseño legislativo reconoce implícitamente la facultad que tiene la autoridad sancionadora para, previa consideración de los aspectos que fueron señalados, adecuar la sanción a cada caso.

Cabe señalar que dicho cambio de criterio no implica un ejercicio arbitrario por parte de esta autoridad, toda vez que existen parámetros fijados por el legislador ordinario, en los que acota el margen de la autoridad, condicionando cada sanción a las características particulares no solo del ilícito en cuestión, sino también del purgador de la pena, en atención al principio de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 Constitucional.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Por otra parte, es importante señalar que esta sanción no extralimita las facultades del Instituto Nacional Electoral al imponer una sanción por el incumplimiento de obligaciones fiscales, ya que, como autoridad administrativa, este Instituto cuenta con las facultades de revisión, comprobación e investigación del origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados, por lo que al realizar la revisión y comprobación de los documentos presentados por los partidos políticos, la Unidad Técnica de Fiscalización verifica que los documentos cuenten con los requerimientos señalados por las autoridades hacendarias a efecto de darle valor pleno y legalidad a las operaciones realizadas. Así, en ejercicio de esta atribución no se extralimita las facultades de este Instituto, tal como ha sido sostenido por la Sala Superior al dictar sentencia en el expediente SUP-RAP-209/2017 que, para mayor claridad se transcribe la parte conducente a continuación:

SUP-RAP-209/2017

*“En concordancia con lo anterior, la autoridad electoral cuenta con facultades para verificar la licitud del financiamiento del que disponen los partidos políticos, de la misma forma debe verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal y, en caso de detectar algún incumplimiento hacerlo del conocimiento de la autoridad hacendaria.*

(...)

*De lo expuesto queda en evidencia que los partidos políticos se encuentran obligados a cumplir con sus obligaciones en materia fiscal, y la autoridad electoral cuenta con atribuciones para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones que repercuten en sus ingresos y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan tomando en cuenta la afectación del marco normativo electoral.”*

Por lo anterior, si bien es cierto que la expedición de recibos de pago asimilados a salario tiene repercusión fiscal y laboral, también lo es, que tiene relación con la normatividad en materia electoral, toda vez que, los multicitados CFDI, resultan indispensables para la revisión de los gastos reportados como “servicios personales”; toda vez que dotan de insumos básicos a esta autoridad como son el control del total de pagos realizados a los colaboradores de partido político, considerando las percepciones y deducciones, retenciones de impuestos de cada uno los colaboradores para cualquier ente que realiza gastos de servicios personales; lo que permite a esta autoridad realizar un análisis más amplio respecto del destino de los recursos que realiza para este rubro; por lo que la

extemporaneidad de este, obstaculiza las facultades de comprobación y resulta inviable que el sujeto obligado realice gastos por este concepto sin llevar un control.

En conclusión, el incumplimiento de los sujetos obligados respecto de su obligación de timbrar CFDI en los plazos señalados por la legislación fiscal produce un retraso y mayor actividad en el actuar de la autoridad fiscalizadora electoral, por lo que de conformidad con sus facultades y atendiendo a las circunstancias que rodean, se considera necesario imponer sanciones de tipo económico a los partidos políticos que incurran en la conducta materia del presente considerando.

(...)

#### **18.2.9 Comité Ejecutivo Estatal de Colima**

(...)

**k) 1** falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **7.10-C28-MORENA-CL**  
(...)

**k)** En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, que vulnera el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Conclusión	Monto involucrado
7.10-C28-MORENA-CL. El sujeto obligado omitió contratar con proveedores, inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de \$1,575.00.	\$1,575.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como en los artículos 291, numeral 1 y 294 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado<sup>13</sup>, que forma parte de la

<sup>13</sup> En este sentido, en los SUP-RAP-251/2017 y SUP-RAP-244/2022 se determinó que “... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya

motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó la observación formulada.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Acreditada la infracción del sujeto obligado en términos de la conclusión sancionatoria y la normatividad antes señalada, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

---

*que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado.[...], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando, además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

**A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

**a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión, la cual se describe en el cuadro denominado **conducta infractora** localizado en el inciso siguiente, la falta corresponde a la **omisión**<sup>14</sup> de contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, atentando a lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron**

**Modo:** El instituto político en el marco de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en lo siguiente:

Conducta Infractora	
Conclusión	Monto involucrado
7.10-C28-MORENA-CL. El sujeto obligado omitió contratar con proveedores, inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de \$1,575.00.	\$1,575.00

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2022.

---

<sup>14</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003



**Lugar:** La irregularidad se cometió en el estado de Colima.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta**

No obra dentro elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida**

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en el bien jurídico tutelado, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores se vulnera sustancialmente la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio que se encuentra sujeto a revisión.

En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado, con lo que se impide garantizar la transparencia y adecuado conocimiento del manejo de los recursos. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito conculca los valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto. Esto es, al omitir contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, se actualiza la falta sustancial.

En este orden de ideas se desprende que, en las conclusiones de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2<sup>15</sup> del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados tienen la obligación de celebrar operaciones únicamente con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.

---

<sup>15</sup> "Artículo 82. (...) 2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes solo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento."

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de bienes y servicios con los partidos políticos y demás sujetos obligados.

En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los partidos políticos deben inscribirse en el padrón del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral.

De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con la firma electrónica (e.firma, antes FIEL) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona.

Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el ejercicio Anual 2022, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de gastos y registro en línea con padrón de proveedores.

Todo ello en concordancia con la Reforma en Materia Político Electoral de 2014, la cual contempló entre los nuevos tipos penales de la materia, como sujetos activos a los proveedores que proporcionen bienes o servicios electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, lo que se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 7, fracción XXI.

En ese sentido, abona a la obligación en comento lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis XX/2018, titulada: *“FISCALIZACIÓN. EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ES OBLIGATORIO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO Y FUERA DE LOS PROCESOS ELECTORALES”*; la cual señala la obligación de los partidos políticos de contratar bienes y servicios exclusivamente con aquellos proveedores que se encuentran

listados en el Registro Nacional de Proveedores, ello en aras de favorecer el ejercicio de las facultades de control y verificación de la autoridad electoral.<sup>16</sup>

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del Reglamento de Fiscalización referido vulnera la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio sujeto a revisión, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino de los recursos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a

---

<sup>16</sup> Con los siguientes datos de localización: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 42 y 43.

determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar el principio de legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es garantizar el principio de legalidad trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudiar.

### **Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación, se establece la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.<sup>17</sup>

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

---

<sup>17</sup> Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

**Conclusión 7.10-C28-MORENA-CL**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) **CALIFICACIÓN DE LA FALTA**, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,575.00 (mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; (...) IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita,

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** del artículo señalado consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, y equivale al **2.5% (dos punto cinco por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$1,575.00 (mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$39.37 (treinta y nueve pesos 37/100 M.N.)**<sup>19</sup>

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$39.37 (treinta y nueve pesos 37/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

#### **18.2.22 Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro**

(...)

---

*dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (...) con la cancelación de su registro como partido político*

<sup>19</sup> El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

**c) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 7.23-C8-MORENA-QE, (...), 7.23-C18-MORENA-QE y (...)**

(...)

**c)** En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las conclusiones sancionatorias que vulneran los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1 y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, a saber:

Conclusiones	Monto involucrado
7.23-C8-MORENA-QE. El sujeto obligado emitió 1130 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión, por un importe de \$5,757,140.01.	\$5,757,140.01
(...)	(...)
7.23-C18-MORENA-QE. El sujeto obligado emitió 194 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión, por un importe de \$2,869,914.83.	\$2,869,914.83
(...)	(...)

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos; así como en los artículos 291, numeral 1 y 294, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado<sup>20</sup>, que forma parte de la

<sup>20</sup> En este sentido, en los SUP-RAP-251/2017 y SUP-RAP-244/2022 se determinó que: “... esta Sala Superior considera que los dictámenes consolidados sobre los ingresos y gastos [...], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen consolidado,[...], es facultad del



motivación y fundamentación de la presente Resolución y que se detalla en cada una de las observaciones realizadas, se hicieron del conocimiento del ente político mediante los oficios de errores y omisiones referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes, así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el sujeto obligado no solventó las observaciones formuladas.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Acreditadas las infracciones del sujeto obligado en términos de las conclusiones sancionatorias y la normatividad antes señaladas, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria observada se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

---

*Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan, derivado de lo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución [...]."*

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando, además, que no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando denominado “**capacidad económica**” de la presente Resolución.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

**A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA**

**a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones, las cuales se describen en el cuadro denominado *conductas infractoras* localizado en el inciso siguiente, las faltas corresponden a la **acción**<sup>21</sup> de emitir comprobantes fiscales CFDI por concepto de sueldos, salarios y equivalentes, de manera extemporánea dentro del ejercicio y posterior al ejercicio sujeto a revisión, atentando a lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1 y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron**

**Modo:** El instituto político, en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio en revisión, incurrió en las conductas infractoras siguientes:

<b>Conductas Infractoras</b>	
<b>Conclusiones</b>	<b>Monto involucrado</b>
7.23-C8-MORENA-QE. El sujeto obligado emitió 1130 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión, por un importe de \$5,757,140.01.	\$5,757,140.01

---

<sup>21</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

<b>Conductas Infractoras</b>	
<b>Conclusiones</b>	<b>Monto involucrado</b>
(...)	(...)
7.23-C18-MORENA-QE. El sujeto obligado emitió 194 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes timbrados de manera extemporánea en el ejercicio de la revisión, por un importe de \$2,869,914.83.	\$2,869,914.83
(...)	(...)

**Tiempo:** Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2022.

**Lugar:** Las irregularidades se cometieron en el estado de Querétaro.

**c) Comisión intencional o culposa de las faltas**

No obra elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida**

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.

Al respecto, resulta oportuno señalar que el 30 de diciembre de 2014 mediante la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal dio inicio el proceso de modernización del comprobante de nómina a través de la factura electrónica o CFDI y sus objetivos primordiales fueron incentivar la formalidad, simplificar el

cumplimiento de obligaciones fiscales y conservar el derecho fiscal a la deducción por parte de aquellos contribuyentes que realicen gastos relativos a los pagos por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, así como preservar el derecho a la disminución de los impuestos correspondientes.

Y de conformidad con el artículo 29, fracción IV del Código Fiscal de la Federación<sup>22</sup> y el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta<sup>23</sup>, los contribuyentes (entre ellos los sujetos obligados en materia de fiscalización) están obligados a expedir comprobantes fiscales por las retenciones de contribuciones que efectúen y remitirlos al Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, en la emisión del CFDI se debe observar el cumplimiento de los requisitos contenidos en las disposiciones fiscales entre los cuales se destacan:

- Que reúna los requisitos referidos en los artículos 29 y 29-A del CFF.
- Atender las disposiciones establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal expedida para el ejercicio.

En este sentido, el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala que para efectos del artículo 27, fracción XVIII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, **no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente** en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, con las obligaciones establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley del

---

<sup>22</sup> **“Artículo 29.-** Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquiden saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes: (...) **IV.** Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a: **a)** Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código y de los contenidos en los complementos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas de carácter general. **b)** Asignar el folio del comprobante fiscal digital. **c)** Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria.

<sup>23</sup> **“Artículo 99.-** Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: (...) **III.** Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo.”

**Impuesto Sobre la Renta, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas debidamente actualizadas y con los recargos respectivos.**

Así, dicho precepto legal establece que se considera cumplido el requisito cuando se observen espontáneamente las obligaciones en materia de retenciones y traslado de impuestos a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio.

Por su parte la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al ejercicio en revisión, establece en su regla 2.7.5.1 que *“los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta regla posterior al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará como fecha de expedición y entrega de tal comprobante fiscal la fecha en que se realizó efectivamente el pago correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el CFDI.*

En el caso a estudio se advierte que derivado de la relación laboral entre el instituto político y sus trabajadores y/o empleados el sujeto obligado emitió comprobantes CFDI por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea dentro del ejercicio y posterior al ejercicio sujeto a revisión, vulnerando sustancialmente la legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas.

De este modo, entre los diversos principios rectores que rigen la actividad electoral, se vulnera de manera directa la **certeza** la cual se constituye como una característica necesaria que deben revestir las operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados con terceros. A fin de materializar dicha finalidad, la autoridad electoral ha adecuado sus disposiciones normativas a los avances tecnológicos y normativos que se han suscitado en otras materias que convergen en el sistema jurídico mexicano.

En el caso concreto, derivado de las reformas en materia fiscal, se instauró un sistema de control basado en la comprobación y facturación electrónica buscando con ello erradicar el ocultamiento o simulación de operaciones, así como lograr un mayor control sobre los ingresos que obtienen las personas que reciben algún tipo

de salario por sus actividades laborales y así tener más conocimiento de los impuestos que se recaudarán por concepto de retenciones a sueldos y salarios. De esta manera, el insumo por excelencia que materializa dicha finalidad es, entre otros, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), documento electrónico que se constituye como el medio idóneo para la validación de operaciones con la autoridad hacendaria.

Es así que, la emisión extemporánea de dichos archivos electrónicos, si bien no impide de manera total la comprobación de los gastos, (toda vez que el timbrado fue realizado, aunque no en el momento idóneo para ello), dificultó su realización, puesto que se materializa una circunstancia latente de encontrarnos ante operaciones que se ocultan a la autoridad hacendaria, o en el peor de los casos, ante operaciones simuladas pues dicha emisión extemporánea impide la certeza y transparencia de las operaciones que realizan los sujetos obligados. De ahí que, al vulnerarse de manera primordial dichos principios, se tiene como resultado la vulneración accesoria al principio de legalidad.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los partidos políticos legalmente constituidos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, sin embargo, de conformidad con el artículo 86 del mismo ordenamiento, tiene la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente.

Así, de una interpretación armónica de la norma fiscal, el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y el artículo 27, fracción XVIII de la misma Ley, no se considerará incumplido el requisito que para las deducciones establece dicha fracción, cuando se cumpla espontáneamente con las obligaciones establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a más tardar en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas debidamente actualizadas y con los recargos respectivos.

En este sentido, a efecto de imponer una sanción, debe atenderse al principio de proporcionalidad el cual establece que la naturaleza de la sanción de las infracciones administrativas sea adecuada a la naturaleza del comportamiento ilícito, y específicamente impone un deber de concretar la sanción de conformidad con la gravedad de los hechos. Es por ello por lo que, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y la situación del infractor en la comisión

de la falta, la autoridad procederá a la determinación de la sanción y si esta establece un mínimo y un máximo a graduar o individualizar, la que corresponda de acuerdo con la ley.

Al respecto, este Consejo General determinó que lo conducente era **graduar** la sanción, atendiendo al comportamiento de los sujetos obligados que facilite tener mayor oportunidad de vigilancia, realizando un adecuado reporte de los CFDI de momento en momento y permita a la autoridad realizar sus funciones de fiscalización por lo que se modificó para sancionar con 1% del monto involucrado; todos aquellos CFDI que sean reportados de manera extemporánea pero dentro del ejercicio que se está fiscalizando y para aquellos casos en los que se realice un reporte de CFDI extemporáneo en un ejercicio posterior al fiscalizado y que por ende la fiscalización se viera prácticamente impedida por la entrega extemporánea, se aplicaría un criterio de sanción mayor, que asciende a un 5% del monto involucrado<sup>24</sup>.

En este entendido, al imponer la sanción, esta autoridad electoral toma el monto involucrado como dato orientativo que sirve de apoyo para poder determinar la sanción adecuada, tomando en cuenta que el valor de la sanción aumenta o disminuye dependiendo de aumento o disminución del monto involucrado de la conducta infractora; es decir, la determinación de la pena está relacionada con la culpabilidad del sujeto (el monto involucrado que el propio sujeto registró de manera extemporánea) y las circunstancias en que se produjo la conducta antijurídica (el ejercicio en el que realizó el timbrado de CFDI extemporáneo, si esa extemporaneidad se da dentro del mismo ejercicio fiscalizado o en un ejercicio posterior).

De lo anterior se tiene lo siguiente:

- Se confirma la naturaleza económica de las sanciones impuestas como consecuencia del incumplimiento a la obligación de emitir comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea.
- La imposición gradual de la sanción, de conformidad con los desfases propuestos genera que dicha sanción sea proporcional y, por ende, conforme a Derecho, por lo cual queda asentado que es correcto establecer

---

<sup>24</sup> Acuerdo INE/CG332/2023, confirmada mediante la sentencia ST-RAP-9/2023.

como criterio de sanción los porcentajes señalados de acuerdo con la temporalidad del incumplimiento.

- La omisión de emitir comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de sueldos, salarios y equivalentes de manera extemporánea **es considerada una falta sustantiva o de fondo.**
- **Al actualizarse la conducta materia de análisis,** el sujeto obligado retrasa la adecuada verificación de momento a momento que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.
- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la potestad de definir la sanción que estime aplicable a los sujetos obligados, lo anterior de conformidad con la facultad sancionadora del Estado o *ius puniendi*.
- El criterio de sanción económica determinado por esta autoridad electoral que considera para la imposición de la sanción el monto involucrado de la falta concreta es proporcional y gradual.

Lo anterior, tomando en consideración que se debe aplicar un método de graduación de carácter progresivo y diferenciado por esta conducta, sustenta la potestad sancionadora del Consejo General, en el sentido de calificar cada caso en lo individual, esto es así, derivado de que convergen dos tipos de extemporaneidades que deben calificarse de manera distinta, con ese sustento es necesario fijar un parámetro objetivo y gradual atendiendo al impacto que tuvo en las labores de fiscalización cada temporalidad, ya que si bien existió un retraso en la expedición de las nóminas la autoridad fiscalizadora sí pudo conocer del destino de los recursos pagados por este concepto, aunque la periodicidad no haya sido igual en todas las operaciones.

En este orden de ideas se desprende que en las conclusiones de mérito, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización<sup>25</sup>, el cual dispone que los partidos políticos deberán retener y enterar

---

<sup>25</sup> “Artículo 68. 1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales. 2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.”



a las autoridades fiscales el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora tenga certeza que los sujetos obligados realizan sus operaciones cumpliendo con las obligaciones en materia de fiscalización a la par de las que le imponen las leyes fiscales, así como la normativa en materia laboral, pues los egresos que realizan relativos al pago de sus dirigentes, empleados, y/o profesionistas independientes, requieren la emisión de los comprobantes que acrediten el pago del Impuesto sobre la Renta, y la emisión de dichos comprobantes debe expedirse dentro de los plazos que establece la normativa fiscal.

Así, la normatividad citada tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad, transparencia y certeza en el destino de los recursos, por ello establece la obligatoriedad de apegarse a las disposiciones que en materia hacendaria se han dispuesto, a fin de aprovechar los medios de validación que actualmente existen, y evitar que se susciten conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

En ese entendido, el sujeto obligado emitió extemporáneamente CFDI por concepto de sueldos, salarios y equivalentes dentro del ejercicio de revisión de aquellos pagos de nómina que exceden el plazo, que va de los tres a los once días como máximo posterior al mes laborado, o bien, de manera posterior al ejercicio sujeto a revisión; sin embargo, la comprobación no resultó idónea, pues se colocó a la autoridad fiscalizadora en la imperiosa necesidad de llevar a cabo procedimientos extraordinarios de comprobación<sup>26</sup> de operaciones a fin de obtener la certeza del manejo de los recursos del sujeto obligado, circunstancia que derivó de su incumplimiento de emitir los comprobantes fiscales CFDI en los tiempos establecidos en la normativa.

---

*“Artículo 17. Momento en que ocurren y se realizan las operaciones. 1. Se entienden que los sujetos obligados realizan las operaciones de ingresos cuando estos se reciben en efectivo o en especie. Los gastos ocurren cuando se pagan, cuando se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios, sin considerar el orden en que se realicen, de conformidad con la NIF a-2 “Postulados básicos” (...)”*

*“Artículo 46. Requisitos de los comprobantes de las operaciones. 1. Los comprobantes de las operaciones a que se refiere el artículo anterior, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.”*

<sup>26</sup> Tales como requerir estados de cuenta a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar información al Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) a efecto de verificar si fiscalmente timbró los comprobantes en tiempo, cotejar los estados de cuenta y pagos con los trabajadores a los que se le pagó nómina y posteriormente verificar si dicha cantidad cuadra con lo reportado en el SAT.

Por otra parte, el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece la temporalidad en la cual se actualizan las operaciones que realizan los sujetos obligados. Así, los ingresos se concretan cuando estos se reciben en efectivo o en especie, mientras que los egresos que realizan se actualizan cuando se pagan, se pactan o cuando se reciben los bienes o servicios.

Asimismo, de conformidad con el artículo 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, dispone que los comprobantes de las operaciones que lleven a cabo los sujetos obligados deberán reunir los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior tiene como finalidad que la autoridad fiscalizadora cuente con aquella documentación que posibilite, en un marco de expedites, comprobar la autenticidad de las operaciones registradas.

Por ende, y de una interpretación sistemática de las normas citadas, es obligación, la emisión de los comprobantes CFDI en tiempo, pues sólo a través del cumplimiento de la totalidad de los requisitos que señalan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al ejercicio sujeto a revisión, la autoridad fiscalizadora puede tener por acreditado que los recursos del ejercicio fiscalizado efectivamente fueron aplicados y, en su caso, enterados en el referido año, situación que en el caso no aconteció.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor vulneró la hipótesis normativa prevista en los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1; y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino de los recursos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de las faltas, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues dichas faltas generan un peligro en general (abstracto) evidentemente deben rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a las que generan las citadas faltas, en tales condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es la legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas, con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al sujeto obligado se traducen en **faltas** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una sola falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la legalidad, transparencia y certeza en la rendición de cuentas, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos los artículos 68 de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numeral 1 y 46, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)**

Del análisis a las irregularidades descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudiar.

### **Calificación de las faltas**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados se considera que las infracciones deben calificarse como **GRAVES ORDINARIAS**.

### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN**

A continuación, se establece la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.<sup>27</sup>

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el proceso electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias<sup>28</sup>, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando denominado **“capacidad económica”** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.

Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral

---

<sup>27</sup> Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

<sup>28</sup> Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-56/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que deben guiar su actividad.

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el partido político, se desprende lo siguiente:

**Conclusión 7.23-C8-MORENA-QE**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$5,757,140.01 (cinco millones setecientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos 01/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la

elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales<sup>29</sup>.

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en dicha falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado por aquellos timbrados extemporáneos dentro del ejercicio sujeto a revisión, es de índole económica, y equivale al **1% (uno por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$5,757,140.01 (cinco millones setecientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta pesos 01/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$57,571.40 (cincuenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 40/100 M.N.)**<sup>30</sup>.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$57,571.40 (cincuenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 40/100 M.N.)**.

---

<sup>29</sup>. Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; (...) IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (...) con la cancelación de su registro como partido político.

<sup>30</sup> El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**Conclusión 7.23-C18-MORENA-QE**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que respecto a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar** de la conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) *CALIFICACIÓN DE LA FALTA*, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe anual correspondiente.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$2,869,914.83 (dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos catorce pesos 83/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales<sup>31</sup>.

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada **fracción III** consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en dicha falta en ocasiones futuras.

En virtud de lo anterior, la sanción a imponer al sujeto obligado por aquellos timbrados extemporáneos dentro del ejercicio sujeto a revisión, es de índole económica, y equivale al **1% (uno por ciento)** sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber **\$2,869,914.83 (dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos catorce pesos 83/100 M.N.)**. Lo anterior, da como resultado una cantidad total de **\$28,699.15 (veintiocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.)**<sup>32</sup>.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento)** de la ministración

---

<sup>31</sup>. Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; (...) IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (...) con la cancelación de su registro como partido político.

<sup>32</sup> El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la conclusión.



**CONSEJO GENERAL**  
**CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$28,699.15 (veintiocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)"

**9.** Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los Considerandos **6, 7 y 8** del Acuerdo de mérito, se modifica el Punto Resolutivo **DÉCIMO**, para quedar de la manera siguiente:

**R E S U E L V E**

(...)

**DÉCIMO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **18.2.9** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Colima**, de la presente Resolución, se imponen al Partido Morena, las sanciones siguientes:

(...)

**k) 1** falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 7.10-C28-MORENA-CL**

Una **reducción del 25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$39.37 (treinta y nueve pesos 37/100 M.N.)**.

(...)

**VIGÉSIMO TERCERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **18.2.22** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro**, de la presente Resolución, se imponen al Partido Morena, las sanciones siguientes:

**c) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 7.23-C8-MORENA-QE, (...), 7.23-C18-MORENA-QE y (...)**

**7.23-C8-MORENA-QE**

Una **reducción del 25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$57,571.40 (cincuenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 40/100 M.N.)**.

**7.23-C8BIS-MORENA-QE**

(...)

**7.23-C18-MORENA-QE**

Una **reducción del 25% (veinticinco por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$28,699.15 (veintiocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.)**.

**7.23-C18BIS-MORENA-QE**

(...)

(...)”

**10.** Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta en la Resolución **INE/CG635/2023** al Partido Morena, en sus Resolutivos **DÉCIMO** y **VIGÉSIMO TERCERO**, así como la modificación procedente realizada de conformidad con lo razonado en el presente Acuerdo:

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Comité Ejecutivo Estatal	Resolución INE/CG635/2023			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
Colima	7.10-C28-MORENA-CL	\$44,731.64	Una <b>reducción del 25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$1,118.29 (mil ciento dieciocho pesos 29/100 M.N.)</b> .	7.10-C28-MORENA-CL	\$1,575.00	Una <b>reducción del 25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$39.37 (treinta y nueve pesos 37/100 M.N.)</b> .
Querétaro	7.23-C8-MORENA-QE	\$5,757,140.01	Una <b>reducción del 25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$57,571.40 (cincuenta y</b>	7.23-C8-MORENA-QE	\$5,757,140.01	una reducción del <b>25% (veinticinco por ciento)</b> de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de <b>\$57,571.40 (cincuenta y siete mil quinientos</b>

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

Comité Ejecutivo Estatal	Resolución INE/CG635/2023			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción	Conclusión	Monto Involucrado	Sanción
			siete mil quinientos setenta y un pesos 40/100 M.N.).			setenta y un pesos 40/100 M.N.).
	7.23-C18-MORENA-QE	\$2,869,914.83	Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$28,699.15 (veintiocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.).	7.23-C18-MORENA-QE	\$2,869,914.83	una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$28,699.15 (veintiocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 15/100 M.N.).

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

**A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG635/2023** y Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG628/2023**, aprobados en sesión extraordinaria celebrada el primero de diciembre de dos mil veintitrés, por el Consejo General, en los términos precisados en los Considerandos, **7, 8 y 9** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **ST-RAP-4/2024**.

**TERCERO.** Notifíquese electrónicamente al Partido Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización, el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 9, numeral 1, incisos c), fracción I y f) del Reglamento de Fiscalización.

**CUARTO.** Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral del Estado de Colima, así como al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para los efectos legales conducentes.

**QUINTO.** Se instruye a los Organismos Públicos Locales para que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra del presente Acuerdo es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SÉPTIMO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**CONSEJO GENERAL  
CUMPLIMIENTO ST-RAP-4/2024**

El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de marzo de 2024, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestro Jorge Montaña Ventura, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

Se aprobó en lo particular el análisis de la sanción a imponer al sujeto obligado por aquellos timbrados extemporáneos dentro del ejercicio sujeto a revisión, de índole económica, y equivalente al 1% sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y, tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Maestro Jorge Montaña Ventura y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA  
DEL CONSEJO GENERAL**

**LA ENCARGADA DEL DESPACHO  
DE LA SECRETARÍA  
DEL CONSEJO GENERAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI  
ZAVALA**

**MTRA. CLAUDIA EDITH SUÁREZ  
OJEDA**